Señor

JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE LA UNIÓN – VALLE DEL CAUCA

Calle 15 # 14- 50 / 52 / 62

jprmpalaunionca@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REPOSICIÓN / APELACIÓN

Ejecutivo Laboral de Mínima Cuantía número: 76-400-40-89-001-2019-00245-00 de: CARLOS ALONZO ÁLVAREZ OCAMPO C.C. 6.357.132 contra EDGAR ALFONSO ESCOBAR VARGAS C.C. 19.313.872 (Q.E.P.D.)

CUSTODIO GÓMEZ NEIRA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., abogado titulado e inscrito con Tarjeta Profesional N° 25.828 del Consejo Superior de la Judicatura, portador de la Cédula de Ciudadanía N° 19.133.239 expedida en Bogotá, apoderado judicial de la señora MYRIAM LILIANA ESCOBAR SIMBAQUEBA, mayor de edad, de ese domicilio, identificada con C.C. N°: 52.191.999 de Bogotá D.C., **hija legítima** y **"heredera determinada"** del señor EDGAR ALFONSO ESCOBAR VARGAS, por este medio formulo recurso ordinario de reposición y en subsidio de apelación contra su auto de fecha 17 de noviembre año avante a fin de que sea revocado y en cambio se sirva Usted librar el que en derecho corresponde.

EL AUTO RECURRIDO

Decidió de manera adversa a los intereses de mi representada la petición de terminación del proceso por desistimiento tácito elevada por el suscrito en los términos indicados en el artículo 317 de nuestro ordenamiento instrumental civil y, el consecuencial levantamiento de las cautelas ordenadas.

Advierte que, efectivamente:

- 1) Mediante proveído del 17 de julio de 2020, el despacho dispuso: integrar el contradictorio con los hermanos JOHN EDGAR, ANGELA PATRICIA y MARÍA FERNANDA ESCOBAR SIMBAQUEBA; ordenó la notificación a los prenombrados y, requirió al apoderado del extremo demandante para que informara al despacho las direcciones donde se practicarían las diligencias notificadorias y así diera cabal cumplimiento al artículo 291 y siguientes del Código General del Proceso.
- 2) Sin embargo, para resolver las solicitudes de mi procurada, el despacho adujo que en el proveído del 17 de julio de 2020:
 - A) No se **"otorgó"** término al apoderado judicial del demandante con el fin de que aportara al juzgado las direcciones de los por notificar, por lo que no es posible dar aplicación al numeral primero (1ª) del artículo 317 C.G.P.
 - B) Que en dicho auto tampoco se advirtió al demandante respecto de la sanción contemplada en la citada norma;
 - C) Que no es posible aplicar lo reglado por el numeral segundo (2º) de la misma disposición porque en el caso concreto se ha evidenciado que el expediente ha tenido actuaciones *"después de proferida la providencia del 17 de julio de 2020, ya que de conformidad con numeral segundo inciso 2º literal c) establece que cualquier actuación, de oficio o a petición de partes de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos prestos en este artículo, y se reitera que obran peticiones de fechas mayo 6 de 2021, 28 de mayo de 2021, 9 de junio de 2021, 15 de julio de 2021 y las últimas providencias datan del 15 de septiembre de 2021, por lo que no puede ser aplicable el referido numeral 2º pues el expediente no ha permanecido sin actuación alguna por más de un año."* (sic)

CONSIDERACIONES DEL RECURRENTE

Es hecho cierto e incontrovertible que el actor enderezó su demanda solamente contra la menor MANUELA ESCOBAR GUERRERO, representada por su progenitora;

También lo es que el demandante se abstuvo de abonar la lista de demandados con los nombres de los demás herederos determinados del fallecido EDGAR ALFONSO ESCOBAR VARGAS, señores: JOHN EDGAR, MYRIAM LILIANA, ÁNGELA PATRICIA y MARÍA FERNANDA ESCOBAR SIMBAQUEBA.

Es igualmente cierto e incontrovertible que el despacho, por advertencia de la señora MYRIAM LILIANA ESCOBAR SIMBAQUEBA, se enteró de la existencia de los herederos determinados arriba referidos.

Que, en virtud de lo antedicho, siendo el 17 de julio de 2020, ese juzgado mediante auto ordenó:

- 1) Integrar el contradictorio con los hermanos ESCOBAR SIMBAQUEBA en su calidad de herederos determinados del causante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 C.G.P.
- 2) Notificarles el mandamiento de pago librado el 26 de junio de 2019;
- 3) Requirió al apoderado judicial del extremo actor para que suministrara las direcciones donde serían notificados los contradictores y, de esa forma dar cabal cumplimiento al art. 291 C.G.P.

Página | 2

La aludida providencia fue notificada por estado del 21 de julio de 2020, hecho que permite inferir con grado de certeza que del requerimiento del Juzgado a su digno cargo tuvieron pleno conocimiento el actor y su apoderado judicial, por lo que no es aventurado concluir que ella cumplió con el fin perseguido.

Si bien es cierto el auto de fecha 17 de julio de 2020 no fijó el término indicado en el canon 317 C.G.P. que es de 30 días para cumplir la orden, también lo es que:

- 1) Ha transcurrido un (1) año más cuatro (4) meses desde su emisión.
- 2) Que, durante ese extenso lapso la parte demandante no obedeció el requerimiento, a pesar de que como lo anota el despacho intervino en el proceso, *<aunque, afirmo, fue valiéndose de peticiones no dirigidas ni relacionadas con el cumplimiento del aludido requerimiento.>*
- 3) Que los términos señalados en el Código General del Proceso “... para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario.” (Art. 117 C.G.P. Inc. 1º), lo que implica su inexcusable obediencia y, a voces del numeral 2º de la misma obra advierte sobre la obligación del juez respecto del estricto cumplimiento de ellos e informa sobre las consecuencias de su inobservancia y, solo posibilita al operador judicial para fijarlos cuando no estén señalados en la ley.
- 4) Que, de lo antedicho forzoso es concluir que el término de 30 días para cumplir con la carga procesal impuesta no lo otorga el juez, sino la propia ley en el apartado 317 C.G.P.
- 5) Que al operador de justicia corresponde determinar la carga procesal e impartir la orden de cumplirla y, de estimarlo necesario, precisarlo en su providencia o simplemente mencionar el artículo en cita o, sencillamente, como en este caso, basta con hacer el requerimiento dado que el destinatario es abogado titulado, inscrito y en ejercicio de la profesión, versado en leyes.
- 6) Que: dada la calidad profesional ostentada por el receptor de la orden; la legalidad de notificación por estado del auto del 17 de julio de 2020 y; la obligación del apoderado demandante de actuar con diligencia dentro de este asunto, no permite excusar su desobediencia en la no consignación del término para acatar el requerimiento del juzgador en el proveído arriba indicado.
- 7) Siendo de esa suerte no puede decirse como lo afirma el auto censurado que en él proveído del 17 de julio de 2020 ese juzgado no **“otorgó”** el término para cumplir la orden de informar la dirección de los contradictores ESCOBAR SIMBAQUEBA y efectivamente notificarlos del mandamiento de pago librado, porque quien lo otorga, fija o determina es el legislador no el juzgador.
- 8) Que, el proveído en cita quedó debidamente ejecutoriado, hizo tránsito a cosa juzgada, le son propios los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

Ahora bien, si se dijera que el auto del 17 de julio de 2020 es inconcluso, escaso o insuficiente, como lo deja notar la providencia atacada, también debería decirse que dichos defectos son enrostrables única y exclusivamente al despacho que su señoría regenta y que de tal incuria derivan las dilaciones que, injustificadas, causan perjuicio a los intereses de mi patrocinada pues viola de manera abierta el debido proceso. Veamos:

- 1) Ha dicho la Corte Constitucional que el incumplimiento de los términos judiciales es justificable solo cuando acaece en cualquiera de las circunstancias indicadas en sentencia T-441-2015. M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PERÉZ: *“El incumplimiento de un término procesal se entiende justificado cuando (i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden*

la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.” En el sub lite, téngase que la dilación del término para responder derivaría de omisión del juzgado por no expresar en su providencia del 17 de julio de 2020 que para acatar el requerimiento el apoderado actor contaba con treinta (30) días, contemplado en el canon 317 del código instrumental civil, error que costó en tiempo un año más cuatro (4) meses, lapso dentro del cual el proceso pudo finiquitar al menos en esa instancia. Lo anotado permite inferir con grado de certeza que en ninguna de las causales arriba señaladas puede ampararse la falencia del despacho.

- 2) *“Se está ante un caso de dilación injustificada o indebida, cuando quiera que se acredite que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. La dilación injustificada que configura la violación de derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar.”* (Sentencia T-441-2015, Cte. Const. M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PERÉZ)
- 3) En nuestro caso, la dilación injustificada o indebida, la genera la omisión del Juzgado por cuanto el término para obedecer que legalmente esta fijado en treinta (30) días y que debió finiquitar el 3 de septiembre de 2020 con la terminación del proceso por desistimiento tácito, se ha prolongado por más de un año y ahora, con el mismo fin perseguido con el primer proveído el Juzgado libra otro, el del 17 de noviembre año avante, con el que se le da nueva oportunidad a la parte requerida para que cumpla con la carga procesal impuesta, segundas oportunidades que no están previstas en la Ley. *“A falta de término legal para un acto, el juez señalará el que estime necesario para la realización de acuerdo con las circunstancias, y podrá prorrogarlos por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y la solicitud se formule antes del vencimiento.”* (Art. 117 C.G.P. Inc. 2º)

Sin hálito de duda, el auto del 17 de julio de 2020 notificado por estado del día 21, igual mes y año, fue adicionado por el que es objeto de censura.

La adición sucedió fuera del término establecido en el apartado 287 C.G.P. Inc. 3º: *“Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.”*

Lo anterior en la medida que lo que debió manifestarse de manera íntegra en el auto del 17 de julio de 2020 no lo fue y, lo que se dejó de decir, se consignó en el calendario 17 de noviembre hogaño, sin más.

Los términos señalados en el Código General del Proceso *“... para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario.”* (Art. 117 C.G.P. Inc. 1º) y aseguída, la misma norma advierte que *“... el juez cumplirá estrictamente los términos señalados en este código para la realización de sus actos. ...”* (Art. 117 C.G.P. Inc. 2º)

*“... bajo el numeral 1 del artículo 317 del Código General del proceso, lo que evita el desistimiento sería que la parte cumpla con la carga para la cual fue requerido, es decir, **integrar el contradictorio en un término de treinta (30) días, solo interrumpiendo el término el acto que sea idóneo y apropiado para satisfacer lo que se pide.**”* (Sentencia STC - 11191-2020 del 9 de diciembre de 2020 C.S.J. Sala de Casación Civil, Radicación no. 11001-22-01-000-2020-01444-01)

En el caso del **numeral segundo (2º) del artículo 317 C.G.P.** estimo errada la fundamentación del despacho en punto de que cualquiera que sea la actuación de la parte demandante dentro de la ejecución de la referencia interrumpe el término para declarar el desistimiento tácito y que, siendo de esa forma, las reseñadas en el auto impugnado cumplieron con esa tarea.

Pues bien, para superar cualquier duda, al punto se han pronunciado nuestras Cortes Suprema de Justicia y Constitucional, señalando a una misma voz que las actuaciones válidas para interrumpir el término de uno (1) o dos (2) años previstos en el artículo 317, Num. 2º que impidan la declaración del desistimiento tácito son aquellas que conduzcan a definir la controversia o a poner en marcha los procedimientos necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer: Es decir, la actuación debe ser apta y apropiada para impulsar el proceso hacia su finalidad, por lo que simples solicitudes de copias o actuaciones sin propósitos serios de solución a la controversia no tienen este efecto al no poner en marcha el proceso.

En este particular evento, ninguna de las intervenciones relacionadas por su señoría en el auto recurrido fue destinadas a cumplir con la carga procesal impuesta por el despacho.

“La Corte resuelve la impugnación contra el fallo de tutela emitido el 1 de octubre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, instaurada por José Isaak González Gómez contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Dieciocho Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de la misma ciudad.

Según los antecedentes, el accionante pidió ordenar dejar sin valor el auto que no accedió a terminar por desistimiento tácito el proceso ejecutivo que le adelanta el Edificio Condor, ya que transcurrieron dos (2) años sin movimientos procesales tendientes a ejecutar la sentencia. Sin embargo, el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá desestimó su pretensión ya que la demandante interrumpió el término con la solicitud de copias que elevó el 8 de ese mes. Para el demandante, esta posición es desacertada ya que esta actuación no generó un impulso procesal. El Tribunal Superior descartó el amparo entendiendo que cualquier solicitud o actuación de parte, sin importar cual sea, interrumpe el término que haya podido transcurrir.

La Corte enfatizó la necesidad de unificar la jurisprudencia en cuanto al desistimiento tácito y específicamente acerca del literal c) del artículo 317 del Código General del Proceso, ya que hasta el momento la Corporación no tenía un precedente consolidado al respecto. Por esto, aclaró que, aunque una interpretación literal de la norma lleva a inferir que “cualquier actuación” con independencia de su pertinencia tiene la fuerza para interrumpir los plazos para que se aplique el desistimiento tácito, **la interpretación gramatical no es la única admitida por la ley, ya que el alcance de la norma debe determinarse teniendo en cuenta su contexto, al igual que los principios del derecho procesal que sostienen la figura.**

De acuerdo con esto, recordó la importancia y función del desistimiento tácito como causal terminación anticipada de los litigios, bajo el entendido de que los llamados a impulsarlos no efectúan los actos necesarios para su consecución. A través de esta medida se logra: i) remediar la incertidumbre que genera para los derechos de las partes la indeterminación de los litigios, ii) evitar que se incurra en dilaciones, iii) impedir que el aparato judicial se congestione y iv) disuadir a las partes de incurrir en prácticas dilatorias (voluntarias o no).

Por lo cual, definió que “la “actuación” que conforme al literal c) de dicho precepto interrumpe los términos para que se decreta su terminación anticipada **es aquella que lo conduzca a definir la controversia o a poner en marcha los procedimientos necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer**” (subrayado fuera del texto). **Es decir, la actuación debe ser “apta y apropiada para impulsar el proceso hacia su finalidad”,** por lo que simples solicitudes de copias o actuaciones sin propósitos serios de solución a la controversia no tienen este efecto al no poner en marcha el proceso.

Por esta razón, bajo el numeral 1 del artículo 317 del Código General del proceso, lo que evita el desistimiento sería que la parte cumpla con la carga para la cual fue requerido, es decir, **integrar el contradictorio en un término de treinta (30) días, solo interrumpiendo el término el acto que sea idóneo y apropiado para satisfacer lo que se pide.** Y en el caso del numeral 2 del mismo artículo, cuando el expediente permanezca inactivo en la secretaría del Despacho, **la actuación que interrumpe el término de desistimiento de un (1) año es solo aquella que cumple la función de impulsarlo, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre.** Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194/2008) en cuanto a que el desistimiento tácito no se aplicará cuando las partes, por razones de fuerza mayor, están imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte decide revocar la sentencia impugnada, conceder la tutela instada por José Isaak González Gómez y, en consecuencia, ordenar al Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá dejar sin efecto el auto de 4 de septiembre de 2019 y todas las actuaciones que se deriven de él.

Artículo 317 del Código General del Proceso: “(...) El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas: (...) c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo.” (Sentencia STC - 1191-2020 del 9 de diciembre de 2020 C.S.J. Sala de Casación Civil, Radicación no. 11001-22-01-000-2020-01444-01) Negrillas y subrayas fuera de texto.

Sean suficientes las razones expuestas para, de manera respetuosa, manifestar a su señoría que existe evidente incongruencia entre el concepto esgrimido por el despacho a su digno cargo mediante auto del 17 de noviembre hogaño y el concepto de nuestros máximos tribunales al punto de la interrupción del término de un año para decretar la aplicación del numeral 2º del art. 317 C.G.P., máxime que como ha señalado la misma Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil:

“La medida legal limita derechos fundamentales y, por eso, es caracterizada a menudo como una sanción, que pretende disuadir a las partes procesales de acudir a prácticas dilatorias –voluntarias o no-, en el trámite jurisdiccional, pero no establece limitaciones excesivas de los derechos constitucionales, toda vez que la afectación que se produce con el desistimiento tácito no es súbita, ni sorpresiva para el futuro afectado, pues éste es advertido previamente por el juez de su deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia. Además, recibe de parte del juez una orden específica sobre lo que le incumbe hacer procesalmente dentro de un plazo claro previamente determinado. De esta forma, la carga procesal (i) recae sobre el presunto interesado en seguir adelante con la actuación; (ii) se advierte cuando hay omisiones o conductas que impidan garantizar la diligente observancia de los términos; (iii) se debe cumplir dentro de un término de treinta (30) días hábiles, tiempo amplio y suficiente para desplegar una actividad en la cual la parte se encuentra interesada. Además, (iv) la persona a la que se le impone la carga es advertida de la imposición de la misma y de las consecuencias de su incumplimiento. Cabe resaltar, por demás, que el desistimiento tácito en la norma acusada opera por etapas. El primer pronunciamiento del juez sobre el mismo tiene como efecto la terminación del proceso o de la actuación. El interesado puede volver a acudir a la administración de justicia. Sólo después, en un nuevo proceso entre las mismas partes y por las mismas pretensiones, se producen mayores efectos, en caso de que vuelva a presentarse el desistimiento tácito.” Sentencia C-1186/08, <3 de diciembre/2008> expediente D-7312 D-7322, Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1194 de 2008. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA.

PRUEBAS

Comedidamente solicito tener como tales todos y cada uno de los folios que componen el proceso de la referencia.

PETICIONES

Bajo las precitadas consideraciones solicito REVOCAR EL AUTO RECURRIDO y en cambio declarar la terminación inmediata del proceso por desistimiento tácito en los términos indicados en el apartado 317 C.G.P.

Como consecuencia de lo anterior, solicito ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas dentro del referido asunto.

Cordialmente,

CUSTODIO GÓMEZ NEIRA
C.C. 19.133.239 Bogotá
T.P. 25.828 C.S. Judicatura